El modelo sumó otra víctima

DARÍO ARANDA :: 12/10/2012

Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto

Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un "sicario" de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. "Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado", denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es "el agronegocios" y exigió al gobierno nacional "acciones contundentes" para frenar la violencia en el campo. "La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado", lamentó la dirigente del Mocase-VC.

Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.

En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol "venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela". Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).

A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por "usurpación" a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: "Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas", zona pretendida para soja y maíz transgénico.

Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: "Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló". Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.

Muerte anunciada

"Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir". Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que,

previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.

“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.

El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.

Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (…) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.

Proyecto cajanoeado

El 19 de abril de 2011, en Buenos Aires, una decena de organizaciones campesinas hicieron público un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Trabajado durante un año y producto del consenso, el proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo extractivo, denunciaba el avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innovó al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una mirada integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.

Fue consensuada y presentada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares. Había pasado casi todo 2011 y ningún legislador había ingresado el proyecto en el Congreso Nacional.

El 16 de noviembre asesinaron a Cristian Ferreyra. El 18 de noviembre hubo una masiva marcha en Capital Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI –donde el Mocase-VC es una de las organizaciones de base) enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional. Una semana después, el 25 de noviembre, el MNCI se movilizó hasta el Congreso Nacional junto al Frente Transversal, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA oficialista y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El proyecto de ley de freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los legisladores kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín Sabbatela e Inés Pilatti.

A casi un año de su ingreso al Congreso, y con el kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto para frenar los desalojos campesinos. “No pueden seguir esperando que se derrame más sangre. Sabemos que no es la solución de fondo, pero esa ley no se puede demorar más, es la ‘Ley Cristian Ferreyra” y ahora también ‘Ley Miguel Galván’. No la pueden demorar más”, reclamó Carrizo, del Mocase-VC, y anunció que hoy jueves al mediodía el MNCI se movilizará al Congreso para exigir la aprobación de la ley.

Avances

En marzo de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la soja transgénica con uso de glifosato, la oleaginosa ocupaba seis millones de hectáreas. Devaluación mediante, en 2003, ya abarcaba 11 millones de hectáreas. La última campaña, el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones toneladas de granos (un 60 por ciento más de la actual cosecha), con un 20 por ciento más de soja.

En sus 180 carillas, el PEA no menciona en ningún momento a campesinos e indígenas. Apenas tres carillas hablan de “agricultura familiar”. El sujeto agrario del modelo es el empresariado rural y las grandes empresas proveedoras de insumos. El “corrimiento de la frontera agropecuaria”, eufemismo técnico para graficar la avanzada del agronegocios sobre regiones extrapampeanas, multiplico los conflictos en el norte de Santa Fe y Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Salta. El 15 de junio pasado, en un almuerzo en la sede del Consejo de las Américas y frente a las mayores empresas estadounidenses, la Presidenta relató: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.

“Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico, que se llama

Intacta (…) Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…). Esto nos da la idea de que el elemento vital, agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria".

El 27 de julio, el MNCI difundió un duro comunicado contra el Gobierno Nacional. "Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos de elección".

"La Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las transnacionales es una gran contradicción con otros principios enunciados desde el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos que los 'dueños' de la tierra y las transnacionales estén embolsando fortunas y en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo debemos leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale, Barrick? La Mesa de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo. El 'yuyo' ya no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por más".

El Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocios implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos y represión: "Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y producir se ve amenazada con cada paso que dan las transnacionales en nuestro territorio, y es por esto que vamos a combatirlas hasta nuestra última gota de aliento. Se trata de vidas, de millones de vidas que están en juego".

Tres semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de Monsanto.

Responsabilidades

El comunicado del Mocase-VC de ayer a la noche era claro: "El gobernador Gerardo Zamora una vez más es responsable de la muerte de un campesino indígena, como lo fue la de Cristian Ferreyra (…) Son conscientes de sus responsabilidades políticas los funcionarios santiagueños inoperantes y cómplices de estos asesinatos de los guardianes de la producción campesina indígena. Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato de Miguel Galván". En el último párrafo, exigen "aprobación urgente" de la ley que frena los desalojos de campesinos.

-¿Qué responsabilidad tiene el modelo agropecuario? (preguntó este periodista) Deolinda Carrizo, experimentado cuadro del Mocase-VC y del MNCI, respondió de inmediato: "Estos asesinatos los provoca el programa estratégico de los agronegocios, las empresas transnacionales y locales que impulsan la soja, que se vienen con el último maíz transgénico, con los agrotóxicos, los agrocombustibles y toda la bosta que venden como un modelo exitoso. ¡Exitoso una mierda. Se lleva la vida de compañeros del campo!"

-En el comunicado está bien clara la responsabilidad que le asignan al gobernador Zamora. Hasta hace una hora, el Gobernador estuvo en un acto en Casa de Gobierno con la Presidenta. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional?

“La Deo” –como se la conoce en el MNCI– se toma un segundo para contestar, pero no le escapa a la pregunta: “Los gobiernos son circunstanciales y nuestra lucha no empezó ni se terminará con este Gobierno. Nosotros luchamos por vivir y trabajar en el campo, para producir alimentos sanos para el pueblo, luchamos por la soberanía alimentaria. Y está bien clarito qué modelo apoya este Gobierno”.

Una lista que crece

- Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de 2009.

- Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos. Roberto López, abuelo qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder.

- Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado. Martíres López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”.

- Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.

- Miguel Galván. 10 de octubre de 2012.

www.dariovive.org

---

https://www.lahaine.org/mundo.php/el-modelo-sumo-otra-victima